Globethics Repository



Nicaragua en busca de un nuevo rumbo [Nicaragua looking for a new direction]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Quezada, Freddy
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-15 03:09:56
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220346

NUEVA SOCIEDAD NRO.123 ENERO- FEBRERO 1993 , PP. 18-22

Nicaragua en busca de un nuevo rumbo

Quezada, Freddy

Fredy Quezada: Escritor y sociólogo nicaragüense, graduado en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que también es catedrático en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es subdirector del Centro para la Investigación de los Movimientos Sociales y Culturales (CIMSCO).

A raíz del maremoto ocurrido en Nicaragua hace pocos meses, una gran cantidad de artículos y ensayos de distintos signos políticos coincidieron en señalar el destino trágico de este pobre país. Castigado y/o elegido, como un nuevo pueblo bíblico una moderna polis griega, se procedía en tales trabajos a enumerar los grandes hitos sociales (invasiones, guerras, dictaduras, revoluciones, contrarrevoluciones, elecciones increíbles, democracia) y naturales (terremotos, huracanes, erupciones, diluvios, sequías y maremotos) que ha debido sufrir toda una generación de nicaragüenses. Ya al ciudadano medio de este país, se puede asegurar, no le impresiona nada; se agotó su capacidad de sorpresa. Y aunque todavía no se haya arrancado los ojos, como Edipo, por lo menos ya no tiene cejas con qué demostrar su asombro. Acaso por ello tome hoy como cotidianidad la apasionante lucha política que libran en su nombre quienes aún aseguran representarlo.

Para brindar una pintura en los planos de la economía, la política interna y las relaciones con EE.UU. que efectúa la sociedad nicaragüense, haremos un balance en términos generales desde la derrota sorprendente del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1990 hasta el triunfo de Bill Clinton en las elecciones de noviembre de 1992 en EE.UU.

Una economía estancada

Una economía estancada, un gobierno que vive de préstamos y donaciones, una población en sus más altos niveles de indigencia es el cuadro desolador que gráfica la situación socioeconómica de Nicaragua. El plan de ajuste estructural impulsado por el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro ha incidido directamente en una tendencia recesiva que afecta a todos los sectores del país. Los instrumentos de política económica se han centrado en la política cambiaria, en el control crediticio y del déficit fiscal, condiciones que exigen los organismos financieros internaciona-

les, en particular el FMI. Sin embargo, una evaluación temprana del impacto de dichas políticas revela más la recesión productiva que los relativos éxitos alcanzados.

El criterio de mantener la paridad cambiaria respecto al dólar de 5 a 1 está en relación a la ortodoxia estabilizadora para sostener la credibilidad en el ajuste. Como consecuencia, se mantiene un estricto control sobre el crédito, y debido a que la liquidez es inferior a la demanda, se bloquea el acceso al capital de trabajo. EL período de enero-septiembre de este año muestra una tasa negativa de 0,1%. Sin embargo, la inflación acumulada desde marzo de 1991 (cuando se aplicó la devaluación de la moneda al 5 por 1 con respecto al dólar) es de 304,8%. No obstante, el mercado cambiario está tensionado por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el extraoficial, en términos reales, de 11% a septiembre (CRIES, 1992:8). Por otra parte, Nicaragua sigue siendo el país más caro de Centroamérica, teniendo los costos de producción más elevados. En tanto que la lucha contra el déficit fiscal se ha basado en la reducción de los gastos, principalmente sociales, y en la ampliación de la tributación. Sin embargo, de los ingresos líquidos recibidos por el país el 60%1o constituyen préstamos y donaciones.

Uno de los indicadores recesivos es la situación del empleo: se ha alcanzado una cifra récord en la historia de Nicaragua. Según cálculos, el nivel de desempleo abierto llega el 48% de la población económicamente activa, mientras que el subempleo llega a niveles más elevados. Pero más dramáticos son los niveles de pobreza, que han pasado del 70% en 1990 al 78% en 1992. En el sector agropecuario, la reactivación de la actividad agroexportadora aún no se ha realizado. Por el contrario, las facilidades fiscales han redundado en beneficio de los grandes capitales; mientras tanto el campesinado está siendo desplazado del mercado interno en provecho de transportistas y comerciantes. Como corolario, las perspectivas plantean una difícil situación económica al finalizar el año y más aún para comienzos, ya que el estancamiento productivo no tiene visos de superar el momento en que se encuentra.

Otra de las perspectivas es que el tipo de cambio será insostenible después de marzo de 1993, por la reducción que se prevé en las reservas internacionales del país* . El cuestionamiento de la «ayuda» norteamericana a Nicaragua y la premura con que el gobierno ha tratado el asunto pone de manifiesto una vez más que si no se obtienen dichos recursos la frágil estructura productiva y de sobrevivencia podría derivar rápidamente en una situación catastrófica.

El curso de la nueva Nicaragua

Globalmente, la inauguración de la nueva etapa política en Nicaragua, después de la derrota del FSLN, arranca con el denominado «Protocolo de Transición», una suerte de compromiso político entre la administración saliente y la entrante donde lo notorio fue asegurar los cargos de la policía y el ejército en manos de connotados dirigentes del FSLN. El acuerdo anunció la primer ruptura dentro del aparato gobernante al excluir de las decisiones centrales al vicepresidente Virgilio Godoy, quien se opuso al espíritu del acuerdo, e incluir como ministro de la Presidencia al yerno de la presidenta, Antonio Lacayo. Desde entonces ha habido tres elementos que van determinando el curso de la nueva Nicaragua: la contradicción entre los poderes del Estado, el auge de los movimientos sociales y los militares.

Los poderes del Estado. Esta confrontación ha estado centrada entre el Ejecutivo, compuesto por un grupo sin partido y en cierta medida «aliado» al FSLN en virtud del «Protocolo», y un Parlamento mayoritariamente de la alianza vencedora Unión Nacional Opositora (UNO) que, contra toda tradición en el país, devino rebelde. La contradicción entre el Legislativo y el Ejecutivo nace en la misma toma de posesión de la presidenta Chamorro en abril de 1990. Como en ese momento presidía la Asamblea Nacional la Dra. Miriam Argüello y se sospechaba, en el grupo del gobierno central, su tendencia radical contra las ventajas del FSLN que suponía el «Protocolo», se procedió a establecer una alianza entre el Ejecutivo, la disciplinada bancada sandinista y un grupo de parlamertarios que apoyaban la candidatura de Alfredo César. Ya con el ingeniero César presidiendo la Asamblea, empezaron a evidenciarse fricciones fuertes entre la bancada de la UNO y el Ejecutivo por la denominada «piñata sandinista» y las leyes 85 y 88 que la amparaban. EL poder legislativo emitió entonces una iniciativa de ley que anulaba tales disposiciones encontrando el veto del Ejecutivo. A partir de entonces se abrió una crisis en las relaciones entre ambos poderes que terminó por dividir a la bancada de la UNO con la emergencia del «Grupo de Centro», aliado a la fracción parlamentaria del FSLN (haciendo mayoría relativa), y alineado con las posiciones gobernantes bajo acusaciones de sus enemigos de aparecer como fruto de «sobornos con presupuestos de la Presidencia».

El clímax de esta crisis sobrevino el 2 de septiembre de 1992 con la resolución de un Tribunal de Apelaciones de Managua al desconocer una decisión de la Asamblea que, por falta de quórum, había elegido a dos secretarios de la Junta Directiva de la Asamblea, impugnada por la bancada sandinista y el Grupo de Centro. El puntillazo que recibió César en esta jugada fue, por último, la defección del ala so-

cialcristiana (UDC) que se presentó como enlace entre la Asamblea y los aliados para desempantanar la situación. Todo de cara a las futuras elecciones para la Presidencia de la Asamblea, cargo clave para el desarrollo de los planes del equipo del gobierno central y los interesados en ellos.

Los movimientos sociales. Mientras las alianzas políticas, rejuegos y requiebres de las luchas parlamentarias se efectuaban por «arriba» con débiles y decorativos llamados a apoyar una u otra causa, por «abajo» el país vivió a mediados de estos últimos tres años, varios movimientos civiles, de signos encontrados, que conmovieron el tablero de las fuerzas políticas y obligarían a los movimientos sociales a redefinirse a sí mismos, teniendo poco o nada que ver los partidos políticos en su beligerancia.

Sólo la convocatoria del gobierno a participar en la Concertación Nacional, compuesta entre otras fuerzas por el FNT, CPT, COSEP (que no firmó), UNAG, en sus dos fases (la primera entre noviembre de 1990 y abril de 1991 y, una segunda muy irregular, entre agosto de 1991 y febrero de 1992) fueron a duras penas islotes de tranquilidad y sosiego, aunque al mismo tiempo fuente de descontentos dentro de una tormenta de tranquilidad y sosiego aunque al mismo tiempo fuentes de descontento, dentro de una tormenta en la que se vieron envueltos los trabajadores estatales en semi-insurrecciones (mayo-junio 1990), tanto por su desempleo al calor de las políticas de ajuste como por sus luchas por la parte de propiedad (25 %) que les correspondía en virtud de los acuerdos para reprivatizar el área estatal; los campesinos al reencontrarse consigo mismos en la lucha por la tierra en el movimiento armado «revueltos» (recontras y recompas unidos) después de haberse opuesto entre sí en la década de los 80; el movimiento juvenil universitario en su lucha por una asignación presupuestaria justa; los gobiernos autónomos étnicos trabados en la reglamentación de su Estatuto de Autonomía por sus contradicciones internas y el laissez faire del Estado Central; la rebeldía de una buena parte de los alcaldes municipales que reclamaban la destitución del jefe de la policía y del ejército; en fin, de un conjunto de actores cuyos reclamos a veces opuestos, paralelos o cruzados han terminado por reducir la capacidad de convocatoria, intermediación, representación y autoridad de unos partidos políticos en franca crisis de legitimidad y consenso.

Los militares. Si convenimos en que hay un vacío de liderazgo generado por los aparatos partidarios, sea por su descrédito o por el escaso atractivo de su discurso, en Nicaragua este vacío usualmente ha sido llenado por la Iglesia o los militares. Saber y matar, como dijo alguna vez Baudelaire. A veces los líderes de estas insti-

tuciones sirven para figurar en, o bendecir a, regímenes fuertes, dictatoriales, cuando encuentran apoyo activo en algunas capas empresarias agresivas y a una sociedad civil atomizada o, bonapartistas de izquierda, cuando trata de apoyarse en algunos sectores populares bajo orientaciones de orden y mando.

Para el caso del ejército nicaragüense, la permanencia del general Humberto Ortega al frente de la institución castrense ha sido prácticamente, junto con la problemática de la propiedad, el foco donde se parten en dos las aguas políticas del país. Desde el «Protocolo de Transición» una parte de los partidos políticos de la UNO y algunos grupos radicales de presión han exigido la destitución tanto del general Ortega como del comandante René Vivas de la jefatura de la policía. Si bien este último fue en efecto removido y sustituido por otro comandante sandinista, con el general está en juego un problema de cálculo e hipótesis para el destrabe de la situación en Nicaragua. Si se va, unos creen que el panorama se estabiliza porque se acaban los recelos de productores, inversionistas y senadores norteamericanos; si se queda, otros, como el gobierno, creen que es la única manera de garantizar el orden en una situación ya bastante caótica.

En su última comparecencia, con todo, Humberto Ortega expresó, asistido por su Estado Mayor, que no renunciaba antes de 1997, o sea después del mandato de la presidenta Chamorro, y que se habían terminado las reducciones de efectivos del ejército. Tales declaraciones parecen indicar ciertas aspiraciones bonopartistas de imponer el orden por vía del fusil y la espada. Sin embargo, Ortega todavía carece de puntos de apoyo importantes, pues se encuentra ante una sociedad civil cansada de autontarismo, una burguesía atormentada por su comportamiento en los diez años anteriores y un gobierno norteamericano empecinado en destruir todo vestigio de sandinismo. No le queda más alternativa que apoyar incondicionalmente al gobierno de Violeta Chamorro. Este último pretende usar su autoridad, tanto en el FSLN como en las filas castrenses, para poder implementar su proyecto económico con mayor margen de maniobra y consolidar un régimen democrático. ¿Hasta cuándo persistirá esa alianza entre el general y sus oficiales con el gobierno? A nuestro parecer depende de la velocidad con que el general encuentre puntos de apoyo importantes (gobierno norteamericano, burguesía nicaragüense) para imponer su proyecto bonapartista, ya que si lo logra en un corto plazo no vacilará en imponer el orden vía manu militari. Ahora bien, en caso de no obtener ningún apoyo importante rápidamente, los propósitos del general quedarán bloqueados por dos alternativas: a) la consolidación de un régimen democrático, en caso de que se resuelva el problema económico; b) una dictadura de corte fascista, en caso de que el problema económico se agrave.

La transición y EE.UU.

Si se puede hablar de un estratega determinante en la derrota electoral sandinista, tenemos que referirnos obligatoriamente al gobierno de EE.UU. bajo el liderato de George Bush. Diez años de guerra de «baja intensidad», si bien debilitaron considerablemente a los sandinistas, no generaron ninguna alternativa que le disputara la hegemonía al FSLN en los órganos de la sociedad civil nicaragüense. Los partidos políticos opositores eran en su mayoría sectas minúsculas aglutinadas alrededor de un personaje con cierto carisma político y con excelentes vínculos internacionales. Realmente parecían enanos comparados con el otrora poderoso partido gobernante, el FSLN.

Sin embargo, era necesario capitalizar de alguna manera el deseo de cambio que se percibía en unas masas cansadas de escasez, servicio militar obligatorio y miserias. Se hacía vital construir un instrumento político que expresara la voluntad colectiva de un nuevo rumbo en la Nicaragua del 90. Y así surgió la UNO, que representaba dos aspectos importantes: uno de carácter histórico al ser la continuadora de la UNO que se enfrentó a Somoza en los 60; el otro de presentación, de envase, ya que la unión de 14 partidos políticos (independientemente de que fueran minúsculos) era la viva representación de una voluntad colectiva hacia el cambio.

Y se dio el cambio. La UNO ganó abrumadoramente las elecciones más democráticas en la historia de Nicaragua. De ahí en adelante, todo parecía indicar que habría «transformaciones profundas» en la Nicaragua posrevolucionaria. Por lo menos las clases pudientes del país y los sectores más conservadores del aparato gobernante de EE.UU. así lo creyeron.

Y a casi tres años de la toma de posesión del sillón presidencial por parte de Violeta Chamorro las «transformaciones profundas» parecen no haberse realizado. Más bien, la mayoría de los partidos que llevaron al triunfo al gobierno actual lo acusan de estar cogobernando con los sandinistas. En ese orden el ultraconservador senador estadounidense Jesse Helms, con la venia de la administración Bush, ha impedido el desembolso de una ayuda de más de 100 millones de dólares del gobierno norteamericano al nicaragüense. Toda una paradoja. Los vencedores de las elecciones de 1990, los partidos de la UNO y el gobierno norteamericano, parecen encontrarse en la oposición, de tal manera que, según esa percepción, su propia criatura, el gobierno de Violeta Chamorro, se les ha rebelado.

Para entender este marasmo es necesario profundizar sobre la verdadera correlación de fuerzas políticas en el país. Correlación de fuerzas que la administración Bush, como el avestruz, obstinadamente se negó a reconocer. Los 14 partidos políticos unidos que ganaron abrumadoramente las elecciones no tienen influencia significativa en la sociedad civil, carecen de vínculos con ella y por tanto, además de representarse ellos mismos, no representan a nadie. Por el contrario, el partido perdedor, el FSLN, es el único partido con ligámenes en la sociedad civil. Los sandinistas dirigen la gran mayoría de los sindicatos u organizaciones gremiales de corte popular y la única organización juvenil de peso en el país. Tienen bajo su control dos diarios que circulan por todo el país, varias radioemisoras y acaban de abrir un canal de televisión. Ningún gobierno con «cinco dedos de frente» puede hacer caso omiso a esta situación. La administración de Violeta Chamorro ha tenido que gobernar en estas circunstancias y, ante las presiones de una sociedad civil que se niega a que le arranquen de un tajo las pocas conquistas obtenidas con el régimen anterior, se ha visto obligada a negociar y hacer concesiones en aras de obtener un consenso mínimo que le permita cierto margen de gobernabilidad en una etapa transitoria de la crisis a la estabilidad.

Por otro lado está la sociedad política (policía, ejército, etc.) heredada. La confusión Estado-partido promovida por el régimen anterior dio como resultado una policía y un ejército partidarios. El gobierno de Violeta Chamorro tenía como una de sus tareas principales despartidizar estas instituciones. Sin embargo el cuerpo de oficiales, columna vertebral de ambas instituciones, está de alguna manera contaminado, por lo que la tarea no se puede llevar a cabo con un simple decreto. Tiene que ser gradual y con la menor cantidad de convulsiones posible. EL ex-miembro de la Dirección Nacional del FSLN, Humberto Ortega, continúa al frente del todopoderoso Ejército Popular Sandinista (EPS). En este caso el gobierno de Chamorro deja entrever que está apostando a una ficha fuerte en el tablero político nicaragüense. El general Ortega ha dado muestra de fidelidad a Chamorro enfrentándose abiertamente con sectores de masas que antes se jactaba de dirigir. Por otro lado, el general representa, a pesar de su «trayectoria», una línea moderada en la oficialidad castrense, así como a lo interno del FSLN. Tomando en cuenta esos factores, el equipo de la presidenta Chamorro ha considerado que Humberto Ortega puede hacer más a favor del «nuevo rumbo» asumiendo la jefatura de sus inquietos oficiales que pasando a retiro militar e integrándose a la vida civil. La administración Bush, bajo la cobertura de las normas diplomáticas, ha acusado de blandengue al gobierno Chamorro en la despartidización del ejército y la policía y da a entender que se le han dado demasiado concesiones a los sandinistas. Esta es una de las razones de la retención de los famosos 100 millones de dólares.

Producto de esas presiones, hace pocas semanas se removió al antiguo jefe de la policía (un «viejo cuadro» sandinista), René Vivas, enviándose a retiro a cinco connotados oficiales de la institución. Pero ello no basta, las presiones persisten y las miras se orientan hacia el jefe del ejército, las exigencias de su destitución no dan muestras de haber disminuido. Tal parece que la administración Bush concluirá su mandato sin haber logrado apartar a Ortega de la jefatura del ejército. A la perspicacia mostrada por la administración norteamericana en la conformación de la UNO y su victoria atronadora, le siguió una miopía política cuando se instaló el gobierno propuesto para tal fin. Decimos esto porque los objetivos que se ha definido la administración norteamericana en Nicaragua, lejos de ser elementos de estabilidad y superación de la crisis nicaragüense, se han convertido en un elemento de socavamiento a la gestión emprendida por Violeta Chamorro.

De ahí que los Estados Unidos sean corresponsables de la situación de crisis que vive actualmente Nicaragua, pues se han manifestado como uno de los principales subvertores del orden institucional surgido de las urnas electorales en 1990. Con la llegada de Bill Clinton a la Casa Blanca se esperan nuevas relaciones. Obviamente que, a diferencia de Bush, Clinton pretende mirar más hacia adentro que hacia afuera, lo que puede incidir en que la nueva administración dé más libertad de maniobra a un gobierno que, en una situación transitoria compleja y difícil, ha dado muestras de flexibilidad y acomodamiento. Ello puede ser bueno para Nicaragua.

Managua, 19 de noviembre de 1992

*A comienzos de 1993, el gobierno nicaragüense decretó una sustancial devaluación del nuevo córdoba (NR).

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 123 Enero-Febrero de 1993, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**